

Las consignas que alimentaron el estallido social (I)

En junio de 2017 el PNUD publicó “Desiguales”, uno de los trabajos más importantes sobre la desigualdad en Chile. En un tiempo cuando se proclamaba a los cuatro vientos que en territorio chileno anidaba “la desigualdad más alta del mundo” ese estudio mostró que entre el año 2000 y el 2015 el coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad de ingreso, se había reducido en 7,2 puntos, una caída de magnitud relevante tratándose de una brecha social que por mucho tiempo pareció imposible de atenuar entre nosotros. Esa tendencia, de mantenerse, podía llevar a Chile por primera vez en su historia a las proximidades del rango de la inequidad que es propio de los países de la OCDE.

Sobre la base de esos datos el economista Eduardo Engel afirmó en agosto de ese mismo año que “las cifras son elocuentes, no importa cómo se mida, la desigualdad viene cayendo durante la última década”. Fue de las escasas intervenciones, contadas con los dedos de una mano, que daban cuenta de ese importante avance. Ninguna generación de chilenos hasta entonces había crecido y prosperado en el contexto de una desigualdad que por fin cedía y era nítidamente decreciente. Lo cierto es que uno de los resultados más notables de los “30 años”, la reducción de la desigualdad, pasaba desapercibido para la mayoría de la población.

En la calle y en el foro público -y en los medios, todo hay que decirlo-, la noción de “la desigualdad más alta del mundo” prevalecía sin contención. Las conclusiones del trabajo del PNUD apenas eran conocidas o eran derechamente ignoradas. El radical aserto siguió siendo proclamado por años en titulares de prensa y se lo encontraba también citado repetidamente en columnas de opinión. Pero, en los hechos, la desigualdad en Chile no era ni siquiera la más elevada de América Latina, mucho menos la más alta del mundo. Cabe notar que desde entonces el coeficiente de Gini ha seguido cayendo, situándonos a una distancia que asoma cada vez más cercana al límite superior del rango de la OCDE (un coeficiente de Gini de 0,4).

Todo esto ocurría mientras el país ocupaba sostenidamente la primera posición de la Región en el índice de desarrollo humano que elabora la ONU (a través del PNUD) -posición que, por lo demás, sigue manteniendo hasta ahora- y, adicionalmente, en tiempos cuando la pobreza caía aquí a los niveles más bajos que se observaban entonces en América Latina.

Por esos mismos días Carlos Peña afirmaba que “somos una sociedad bastante razonable, con personas satisfechas en términos generales con su vida personal, con grupos sociales que han experimentado un gran ascenso... y los problemas que padecemos son típicos de una sociedad de clase media”.

Cuando el rector escribió esas líneas nada hacía presagiar los graves acontecimientos que se desencadenarían apenas dos años después, en octubre de 2019. Para que en una “sociedad bastante razonable”, donde la pobreza y la desigualdad se reducían a ojos vista, se produjera un estallido social de la magnitud de la que el país padeció hizo falta algo más que el malestar que se invocó aquí y allá para justificarlo. La rabia e indignación irrefrenables que provocan este tipo de consignas extremadamente corrosivas, sobre todo entre los más jóvenes, han de haber contribuido decisivamente a su ocurrencia.

En las siguientes entregas revisaremos otras dos que concurrieron en ese período a agudizar esa indignación hasta llevarla al paroxismo: la Constitución “tramposa” y “el robo legalizado de las AFP”, consignas que en la década pasada fueron intensamente difundidas y creídas por millones de chilenos.